

**NOTA**

---

**Asunto: Informe resumido de la sesión plenaria <sup>1</sup>**  
**- Bruselas, 6 y 7 de febrero de 2003**

---

**I. APERTURA DE LA SESIÓN**

**1. Presentación del proyecto de los títulos I, II y III (artículos 1 a 16) de la Constitución**

El Presidente presentó en nombre del Praesidium el proyecto de texto de los primeros 16 artículos de la Constitución, precisando que se trata de una propuesta sobre la que los miembros de la Convención pueden formular observaciones y propuestas de enmienda. Corresponderá a la Convención pronunciarse sobre el texto que deberá figurar en la Constitución.

La sesión plenaria de los días 27 y 28 de febrero se dedicará al debate sobre el presente proyecto de articulado. Con objeto de estructurar el debate, se ruega a los miembros de la Convención que presenten a la Secretaría sus propuestas iniciales de enmienda para el lunes 17 de febrero, para que el Praesidium tome conocimiento de las mismas, las agrupe y las presente de forma sistemática.

Se precisó que todas las enmiendas se harán públicas en el sitio de internet de la Convención, y se presentarán de manera que se facilite su examen comparativo.

---

<sup>1</sup> La transcripción de la sesión plenaria puede consultarse en el sitio web, cuya dirección es la siguiente: <http://european-convention.eu.int>.

## **2. La Europa Social**

- **Debate sobre el informe del Grupo XI, presidido por el Sr. Katiforis**  
**(doc. CONV 516/03)**

### *i) Presentación del informe a cargo del Sr. Katiforis*

El Sr. Katiforis recordó la importancia del asunto considerado. Se trata de un asunto de especial importancia para Europa, y en relación con el cual Europa puede estar orgullosa de sus logros. Los temas incluidos en el mandato del Grupo pueden clasificarse en tres categorías amplias: valores y objetivos; atribución de competencias; instrumentos y procedimientos.

Por lo que atañe a los valores, el Grupo había aceptado la necesidad de incluir en el tratado constitucional artículos breves y concisos. En algunos casos le había sido difícil catalogar algunas ideas como valores o como objetivos. Fueron muchas las propuestas formuladas, pero el Grupo llegó a la conclusión de que el texto sobre los valores debería incluir la justicia social, la solidaridad y la igualdad, en particular la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que atañe a los objetivos, el Grupo, tras un prolongado debate, acordó recomendar la inclusión de una referencia al "pleno empleo". Se llegó también a un consenso sobre la inclusión de una referencia a la promoción de un nivel elevado de protección social. Se propusieron muchos otros objetivos posibles. Se mencionó la cuestión de si la idea de una Europa social quedaría plasmada más adecuadamente con la definición del concepto global de un "modelo social europeo", pero el Grupo no siguió este planteamiento.

En materia de competencias, el Grupo llegó a la conclusión de que en general las competencias existentes son suficientes, aunque algunas de ellas saldrían ganando si se definieran con mayor precisión, lo que permitiría un ejercicio más cumplido de las mismas. Tal es el caso, en particular, de la salud pública. Por lo demás, el Grupo aceptó el alegato en pro de un refuerzo de la base jurídica que permita legislar en el ámbito de los servicios de interés general.

En lo relativo a los procedimientos, y pese a las objeciones firmes presentadas por algunos de sus miembros, el Grupo registró un amplio respaldo a la inclusión del método abierto de coordinación en el tratado. Se subrayó, sin embargo, que debe mantenerse la flexibilidad del método, y que éste no debe socavar las actuales competencias de la Unión. Se trató la delicada cuestión del voto por mayoría cualificada. Si bien todos podrían aceptar el mantenimiento del acuerdo transaccional de Niza sobre el artículo 137, un número apreciable de miembros del Grupo estimó conveniente una mayor extensión del voto por mayoría cualificada en la esfera social. El Grupo abogó con firmeza por el mantenimiento y la consolidación del papel de los interlocutores sociales en la negociación colectiva y por que se reconozca adecuadamente la contribución de la sociedad civil en el ámbito de la política social.

El Sr. Katiforis saludó el hecho de que el Grupo hubiera logrado una opinión consensuada sobre diversos aspectos, a pesar de las diferencias de extracción y de puntos de vista de sus miembros. A juicio de todos, la Unión Europea debe desempeñar un papel importante en el ámbito de la política social.

## *ii) Debate del pleno*

El enfoque general presentado por el Grupo mereció una acogida favorable por parte de la Convención, que oyó asimismo las intervenciones de los representantes de los interlocutores sociales, del Comité Económico y Social y de la Convención de los Jóvenes.

Muchas de las personas que intervinieron expresaron su acuerdo con la sugerencia del Grupo de que el futuro tratado constitucional mencione en sus primeros artículos la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad y la igualdad, en particular la igualdad entre hombres y mujeres.

El debate puso de manifiesto un respaldo amplio a las recomendaciones del Grupo en relación con los objetivos: se hizo referencia al pleno empleo, la justicia social, la paz social, el desarrollo sostenible, la cohesión económica, social y territorial, la economía social de mercado, la calidad del empleo, la educación y la formación permanente, la inclusión social, un nivel elevado de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por motivos de origen racial o étnico, de orientación religiosa o sexual, de minusvalía y de edad, los derechos del niño, un nivel elevado de salud pública y unos servicios sociales y servicios de interés general eficaces y de alta calidad.

Por lo que a las competencias se refiere, el debate del pleno no cuestionó la conclusión del Grupo de que las competencias en materia social deben mantenerse como competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. Pocos fueron los miembros que abogaron por replantear las disposiciones del actual artículo 137, que excluyen de las competencias de la Unión las remuneraciones, el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal.

Muchos de los miembros propugnaron la ampliación de las actuales competencias de la Unión en el ámbito de la salud pública (artículo 152) para luchar a escala europea contra los riesgos transfronterizos de epidemias y de terrorismo biológico.

Los servicios de interés general representaron en muchos casos el eje de las intervenciones, siendo el quid de la cuestión la conveniencia de modificar el actual artículo 16 del Tratado para hacer de él una auténtica base jurídica que permita la adopción de verdadera legislación de la Unión en el ámbito de los servicios de interés general. Los miembros de la Convención expresaron posturas muy divididas a este respecto, aunque un número apreciable de los mismos se pronunció a favor de una solución de este tipo.

Por lo que atañe al método abierto de coordinación, la mayor parte de los miembros que intervinieron abogó por la inclusión de dicho método en el tratado, para que quede más claramente definido y resulte más transparente y democrático sin perder las cualidades que le otorgan, en particular, su flexibilidad. Con todo, algunas de las intervenciones fueron contrarias a esta inclusión.

La propuesta del Grupo de incluir en el tratado los procedimientos necesarios para garantizar la coherencia entre las políticas económica y social con ocasión del Consejo Europeo de primavera recibió una amplia acogida favorable. Sin embargo, el debate no dio lugar a un consenso acerca de la modificación del actual artículo 128 del TCE para suprimir la exigencia de compatibilidad de las directrices para el empleo con las orientaciones generales de las políticas económicas.

El debate más difícil fue el de la ampliación del voto por mayoría cualificada a los ámbitos que actualmente requieren unanimidad. Varios de los miembros recordaron, por otra parte, que la propia definición de mayoría cualificada debería ser objeto de debates específicos.

Un gran número de miembros de la Convención defendió el paso a la mayoría cualificada y a la codecisión, al menos según lo acordado en Niza, dejando sujeto a la unanimidad, pues, únicamente el ámbito de la seguridad social y la protección social de los trabajadores. Igualmente, un gran número de miembros hizo votos por que todas las materias a que se refieren los actuales artículos 13, 42 y 137 del TCE queden sujetas a la codecisión y la mayoría cualificada.

No obstante, algunos miembros de la Convención subrayaron que el Tratado de Niza acaba de entrar en vigor, por lo que este paso a la mayoría es posible a condición de que los Estados miembros lo deseen. Esos mismos miembros confirmaron que no pretendían replantear las disposiciones acordadas en Niza a este respecto.

Por último, el debate confirmó que los interlocutores sociales y la sociedad civil deberían tener un lugar en el futuro tratado constitucional.

### *iii) Conclusiones*

Al término del debate, el Presidente observó que se había alcanzado un consenso a favor de que la Constitución consagre principios como los de dignidad humana, justicia social, solidaridad e igualdad, en particular la igualdad entre hombres y mujeres. El Presidente subrayó que esta última se incluye entre los objetivos que podrían figurar en el artículo 3 del futuro tratado constitucional.

El Presidente observó además que el objetivo del pleno empleo cuenta con un respaldo muy amplio, aunque sólo puede entenderse como una meta hacia la que es preciso orientarse, sabiendo que no es posible alcanzarla en su plenitud.

El Presidente señaló que en el proyecto de articulado presentado a la Convención, el Praesidium había recogido ya todos estos elementos de una forma o de otra.

Por lo que respecta a las competencias, el Presidente destacó el consenso en el sentido de que las competencias sobre cuestiones sociales seguirán siendo competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. En lo tocante al actual artículo 137 que excluye de las competencias de la Unión las remuneraciones, el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal, el Presidente señaló que no se había efectuado un auténtico debate sobre esta cuestión, por lo que por el momento no era posible replantearse estas exclusiones.

El Presidente tomó nota de una demanda apreciable por parte de la Convención de que se efectúe un ligero retoque de la formulación de las actuales competencias de la Unión en el ámbito de la salud pública (artículo 152). Esta modificación tendría la finalidad de luchar a escala europea contra los riesgos transfronterizos de epidemias y terrorismo biológico. Anunció, pues, que se estudiaría esta cuestión.

En relación con los servicios de interés general y la cuestión de la conveniencia de modificar el actual artículo 16 para convertirlo en una auténtica base jurídica que permita la adopción de legislación de la Unión sobre servicios de interés general, el Presidente observó que existe una fuerte demanda en tal sentido. Sin embargo, se preguntó por los efectos concretos de una nueva redacción del artículo 16, y por el tipo de legislación a cuya adopción podría llevar esta base jurídica. El Presidente señaló que entre los Convencionales existían grandes divergencias de opinión a este respecto, aun cuando un número importante se había pronunciado a favor de la modificación del artículo 16 para convertirlo en una base jurídica. Anunció que el Praesidium trataría esta cuestión.

El Presidente observó que el debate sobre el método abierto de coordinación había sido animando, lo que, sin embargo, confirmaba la voluntad de la mayoría de los Convencionales de que este método se consigne en el tratado, a fin de definirlo con mayor claridad y darle mayor transparencia y acentuar su carácter democrático sin menoscabo de sus cualidades relacionadas, en particular, con su flexibilidad. Ahora bien, dado que la ventaja de este método es su flexibilidad, el Presidente se preguntó si era oportuna una definición más precisa que implicaría, precisamente, el riesgo de que dicha flexibilidad se perdiera.

El Presidente destacó que la propuesta del Grupo de consignar en el tratado los procedimientos destinados a garantizar la coherencia entre las políticas económica y social en el Consejo Europeo de primavera había sido bien acogida. Indicó que esta cuestión corresponde a la segunda parte del futuro tratado constitucional.

Por lo que respecta a la extensión del voto por mayoría cualificada (VMC) a los ámbitos en los que actualmente se requiere unanimidad, el Presidente destacó la dificultad del debate y recordó que se trata de un asunto que ya había necesitado difíciles negociaciones en la CIG de Niza. Recordó que el Tratado de Niza permite este paso al sistema de mayoría, por decisión unánime del Consejo. Sin embargo, el Presidente observó que muchos de los Convencionales abogan por que se pase desde ahora al sistema de mayoría cualificada y codecisión, al menos en la forma acordada en Niza, quedando sujetos a la unanimidad únicamente los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, al tiempo que otros Convencionales, entre ellos algunos representantes de los gobiernos, se opusieron a cualquier cambio respecto del compromiso que recoge el Tratado de Niza. Como conclusión, el Presidente afirmó que sería preciso reflexionar sobre esta cuestión.

Por último, el Presidente observó que los interlocutores sociales y la sociedad civil deberán tener un lugar en el futuro tratado constitucional, en el título "Vida democrática".

El Presidente concluyó señalando que el debate había permitido realizar avances pero no había llevado necesariamente a resolver todos los puntos. Dado que varias de las cuestiones se refieren a la segunda parte del futuro tratado, la Convención volverá a tratarlas más adelante.

### **3. Debate sobre la dimensión regional y local (doc. CONV 518/03)**

#### ***i) Introducción del debate***

El Presidente subrayó la importancia del debate sobre la "dimensión regional y local en Europa", habida cuenta de que, en un sistema de 25 Estados miembros con casi 450 millones de habitantes, la acción política no puede centralizarse sino que necesita un sistema de relevos. Recordó el papel esencial que desempeñan ya –y que desempeñarán en mayor grado en el futuro– los gobiernos regionales y locales, en especial en la ejecución de gran número de políticas de la Unión, señaladamente las que atañen a la vida y a las inquietudes más cotidianas de los europeos.

Señaló que los dirigentes elegidos regionales y locales están representados por los observadores del Comité de las Regiones, que participan en los trabajos de la Convención, y que en esa sesión estaban acompañados de su Presidente, Sir Albert Bore. Tanto mediante su participación en el Comité de las Regiones como a través de sus grandes organizaciones representativas europeas, han seguido con atención, desde sus inicios, los trabajos de la Convención: son prueba de ello el importante número de contribuciones recibidas en el Foro, la amplia participación en las reuniones del grupo de contacto presidido por la Sra. de Palacio y posteriormente por el Vicepresidente Jean-Luc Dehaene, y las contribuciones presentadas por los propios miembros de la Convención.

El Presidente recordó los diversos dictámenes adoptados por el Comité de las Regiones, especialmente el de Lord Tope, y las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo a raíz de los informes de los Sres. Lamassoure y Napolitano, e indicó que todos estos análisis y propuestas se habían puesto en conocimiento del Praesidium, que se propone recoger los que tienen carácter constitucional y ha decidido abrir una serie de pistas de reflexión (véase el doc. CONV 518/03). Completa este expediente un documento (CONV 523/03) en el que se resumen de forma sucinta los trabajos del grupo de contacto reunido la semana anterior por el Vicepresidente Dehaene, al que se adjunta un cuadro sinóptico de las propuestas emanadas de los medios regionales y locales y de las instituciones.

Por último, el propio Praesidium, en la propuesta sobre los artículos 1 a 16 presentada a la Convención, ha optado desde ya por tener en cuenta esta realidad de la dimensión regional y local de la Unión.

## *ii) Debate del pleno*

Muchos de los Convencionales recordaron que el respeto del derecho de los Estados miembros de organizar por sí mismos sus estructuras internas constituye una regla fundamental. Igualmente, muchos insistieron en la necesidad de respetar la diversidad de esas estructuras internas, que precisamente constituye una de las riquezas de Europa. Algunos precisaron además que no es conveniente oponer las regiones de Europa a los Estados, y descartaron cualquier idea de homogeneización en esta materia.



Si bien hicieron hincapié en planos diferentes, ora el regional, ora el local, los Convencionales reconocieron de forma unánime la importancia de la dimensión regional y local en Europa, y se llegó a un amplio consenso a favor de que esta realidad quede consagrada en los primeros artículos de la Constitución, como se proponía, concretamente, en el informe Napolitano del Parlamento Europeo. La propuesta del Praesidium de prever una referencia a los poderes regionales y locales en el apartado 6 del artículo 9 fue bien recibida, aunque algunos propugnaron su aparición más al principio, en el mismo artículo 1 de la Constitución. Al tiempo que algunos miembros defendieron la fórmula propuesta por el Praesidium, otros propusieron ir más lejos en la consagración del principio de autonomía local (o de libre administración en el plano local); en este contexto se mencionó asimismo el respeto de la democracia local. Algunas de las intervenciones sugirieron asimismo que la Constitución podría hacer referencia a la Carta europea de la autonomía local del Consejo de Europa, o permitir la adhesión de la Unión a dicho Convenio.

Algunos de los miembros abogaron, además, por que la Constitución haga referencia también a la identidad regional o a la diversidad cultural y lingüística, e incluso a los derechos de las minorías.

Un número importante de miembros recalcó el cometido de los gobiernos regionales y locales en el planteamiento de la subsidiariedad. Algunos destacaron que la subsidiariedad debería referirse igualmente a los planos regional y local, y propusieron que ésto se tuviera en cuenta en la redacción del protocolo sobre la subsidiariedad.

De igual modo, la idea de que se consulte a quienes deban aplicar o hacer aplicar la legislación o las políticas de la Unión en el momento de la preparación de dicha legislación o de dichas políticas mereció un amplio eco en la Convención, que confirmó e incluso reforzó las propuestas formuladas en tal sentido por los Grupos "Subsidiariedad" y "Simplificación", especialmente por lo que atañe a la consulta previa.

De tal manera, se llegó a un consenso en el sentido de incluir adecuadamente la consulta de los entes territoriales de la Unión, en los ámbitos que les afecten, en el título VI de la Constitución ("De la vida democrática de la Unión") y en la parte dispositiva relativa a la subsidiariedad. Los miembros se declararon favorables a la realización de esta consulta en una fase muy temprana de la elaboración y de la aplicación de la legislación y los programas de la Unión, y algunos precisaron que la consulta debería alcanzar a todos los niveles de los entes territoriales, incluidos los parlamentos regionales, concretamente a través de sus organizaciones representativas. En este sentido, se sugirió asimismo que en las propuestas legislativas de la Comisión se evalúen las cargas (incluidas las financieras) que la incorporación de las mismas impondría a los entes regionales y locales.

Numerosos Convencionales subrayaron la importancia del papel del Comité de las Regiones en la representación de los niveles de gobierno regional y local dentro de la Unión. Algunos dudaron, sin embargo, de su correcto funcionamiento.

La propuesta del Grupo "Subsidiariedad" de que se atribuya al Comité de las Regiones un papel en el sistema de alerta rápida y se le reconozca el derecho de recurrir al Tribunal de Justicia en caso de violación del principio de subsidiariedad contó con amplio respaldo de los Convencionales. Además, en varias de las intervenciones se propugnó la atribución al Comité de las Regiones de un derecho de recurso en defensa de sus propias prerrogativas, idea que no compartieron todos los miembros.

Numerosos miembros se refirieron a la cuestión de la composición y de la representatividad del Comité de las Regiones. Algunos señalaron la gran desproporción existente en la atribución de escaños (por ejemplo, algunas regiones están más pobladas o son más extensas que ciertos Estados miembros), y subrayaron que los Estados miembros con menos población pueden acceder al Tribunal de Justicia en tanto que no pueden hacerlo las regiones, por muy grandes que sean. Otros recordaron que no siempre todos los niveles de entes territoriales de un mismo país disponen de una representación equitativa en una misma delegación, siendo a veces puramente residual la representación de algunos de los niveles. Por último, algunos pidieron que en lo sucesivo los miembros del Comité de las Regiones sean elegidos en lugar de ser nombrados por los gobiernos nacionales. Otros Convencionales se opusieron, en cambio, a cualquier modificación de las normas actuales que rigen la composición del Comité.

Algunos de los miembros estimaron que cuando las instituciones no siguieran el dictamen del Comité deberían justificar su decisión, en tanto que otros abogaron por que se modifique la denominación del Comité de las Regiones o incluso que se le dé la categoría de institución. Esta última propuesta, en concreto, no contó con el respaldo de algunos de los Convencionales, cuya postura era contraria a la misma.

Varios Convencionales abordaron la cuestión de las regiones con competencias legislativas, pero otros se opusieron a que se establezca un distingo entre distintos tipos de entidades o a que se atribuya a algunas un estatuto de privilegio. Se hizo referencia a la cuestión de redactar con mayor claridad el artículo 203, que posibilita el nombramiento de ministros regionales para participar en el Consejo. Otros abogaron por que se refuerce el papel de las regiones –que para las elecciones europeas deberían constituir la circunscripción electoral de base en los Estados miembros– y pidieron que se cree un estatuto de "región socia de la Unión", que sería otorgado por los Estados miembros.

Algunos Convencionales abogaron por que se conceda a las regiones con competencias legislativas el derecho de recurso ante el Tribunal, alegando que ese derecho es consecuencia lógica de las competencias con que cuentan dichas regiones. Se observó, en particular, que ese derecho podría llevar aparejada, como contrapartida, una obligación de lealtad hacia el Estado miembro y la Unión. Algunos miembros estimaron que no debía dejarse esta cuestión en manos de la evolución de la jurisprudencia, y que bastaría con una ligera modificación del párrafo cuarto del artículo 230 que ampliara el derecho de recurso general de las personas físicas y jurídicas en lo relativo a los actos de carácter general que les afecten directamente. Otros se inclinaron por que las regiones sólo puedan reclamar ante el Tribunal mediante recurso interpuesto por el Comité de las Regiones, por el Estado miembro correspondiente o incluso (según algunos) por la segunda cámara de un parlamento nacional.

Por último, varios miembros hicieron votos por que se añada al objetivo de cohesión económica y social el de cohesión territorial. Otros dieron a conocer sus inquietudes relativas a territorios concretos, como las regiones ultraperiféricas o insulares, y abogaron por que se mantengan e inclusive se refuercen las normas, protecciones y estatutos especiales existentes.

Se reclamó reiteradamente, por otra parte, que las regiones situadas en las fronteras interiores de la Unión puedan contar con un marco jurídico que favorezca la cooperación transfronteriza, que todavía debe afrontar múltiples obstáculos.

### *iii) Conclusiones*

Como conclusión del debate, el Sr. Dehaene estimó que el mismo había resultado especialmente útil.

Observó que en la Convención se había registrado un acuerdo muy amplio a favor de que la Unión respete la competencia de cada Estado para decidir acerca de sus estructuras internas y de la organización de los poderes públicos en los planos regional y local. Señaló la voluntad común, manifestada en el marco de la Convención, favorable a la inclusión en los primeros artículos de la Constitución de una referencia a la realidad de la dimensión regional y local de la Unión.

Lo mismo ocurre con la consulta a los entes regionales y locales, que debería preverse en el título VI de la Constitución, relativo a la vida democrática de la Unión, y en el protocolo sobre la subsidiariedad.

El Vicepresidente señaló que aun cuando las propuestas relativas al Comité de las Regiones habían sido parcialmente controvertidas, se había dado importancia al papel del Comité en materia de subsidiariedad.

Por último, indicó que el Praesidium deberá reflexionar sobre las cuestiones relativas al derecho de recurso, teniendo presentes las intervenciones de los Convencionales.

#### 4. Comunicaciones del Praesidium

##### a) Mandato del grupo de expertos designados por los Servicios Jurídicos para la parte II

El Presidente informó al pleno de que, como ya se había anunciado en diciembre, el Praesidium había convenido en que –en paralelo con su labor de redacción del proyecto de parte I de la Constitución– deberían avanzar los trabajos relativos a la adaptación de las disposiciones del TCE y del TUE que deberán figurar en la parte II. Para ello, la Secretaría de la Convención ha realizado un trabajo preliminar de carácter indicativo, identificando las disposiciones que se mantendrán sin cambios, las que deberán adaptarse desde el punto de vista técnico en función de las conclusiones ya alcanzadas por la Convención, las que deberán sufrir modificaciones de fondo y las que deberán suprimirse o que se han quedado obsoletas. Al tiempo que el Praesidium acordó reservarse –con ayuda de la Secretaría– la redacción de las disposiciones correspondientes a la tercera de estas categorías, decidió encomendar a un grupo de juristas designados por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión la tarea de revisar las disposiciones de la segunda y la cuarta de estas categorías, en especial para adaptar las disposiciones de la parte II atendiendo a las recomendaciones del Grupo "Simplificación" que haya aprobado el pleno.

Se otorgó a estos juristas un mandato muy preciso y limitado, y el resultado de sus trabajos se elevará al Praesidium, que, previa evaluación, podrá incorporarlo en el proyecto de Constitución. El mandato se difundió con la signatura CONV 529/03.

##### b) Círculo de debate sobre el Tribunal de Justicia

El Presidente recordó que en la sesión de enero se había hecho sentir la necesidad de crear un "círculo de debate" sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia. Entretanto, el Sr. Vitorino ha aceptado encargarse de moderar dicho círculo, y el Praesidium ha definido el marco de sus trabajos, que se ha difundido con la signatura CONV 543/03. Este círculo deberá tener una composición más reducida que los grupos de trabajo, y en lo posible, sus miembros deberán poder aportar conocimientos especializados en la materia, con el fin de garantizar la eficacia y la rapidez de sus conclusiones. Se ha invitado a los componentes de la Convención a que comuniquen a la Secretaría los nombres de los Convencionales que podrán participar en el mismo.

**Sesión plenaria de los días jueves 6 y viernes 7 de febrero de 2003**

**LISTA DE ORADORES**  
**por orden de intervención**

*Jueves 6 de febrero*

**1. Presentación del informe del Grupo IX "Europa Social" (doc. CONV 516/03), a cargo del Sr. Katiforis**

D.<sup>a</sup> Anne VAN LANCKER - Parlamento Europeo  
D. Jurgen MEYER - Alemania (Parlamento)  
D. Gijs de VRIES - Países Bajos (Gobierno)  
Ben FAYOT - Luxemburgo (Parlamento)  
D. David O'SULLIVAN - (Comisión)  
D. Aloiz PETERLE - Eslovenia (Parlamento)  
D. Dick ROCHE - Irlanda (Gobierno)  
D. Timothy KIRKHOPE - Parlamento Europeo  
D. Jacques FLOCH - Francia (Parlamento)  
D. Hannes FARNLEITNER - Austria (Gobierno)  
D. Alberto COSTA - Portugal (Parlamento)  
D. Emilio GABAGLIO - Interlocutores sociales  
D. Georges JACOBS - Interlocutores sociales  
D. Jan KOHOUT - República Checa (Gobierno)  
D. Joachim WUERMELING - Parlamento Europeo  
D. Peter HAIN - Reino Unido (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Pervenche BERES - Parlamento Europeo  
D. Michel BARNIER - Comisión  
(*Tarjetas azules: Conde de Stockton, Thorning-Schmidt, Pieters*)  
D. Josep BORRELL - España (Parlamento)  
D. Hans Martin BURY - Alemania (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Marie NAGY - Bélgica (Parlamento)  
D. Dimitrij RUPEL - Eslovenia (Gobierno)  
D. Elmar BROK - Parlamento Europeo  
D.<sup>a</sup> Maria Eduarda AZEVEDO - Portugal (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> Sylvia-Yvonne KAUFMANN - Parlamento Europeo  
D. Jozef OLEKSY - Polonia (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> Piia-Noora KAUPPI (Parlamento Europeo)  
D. John BRUTON - Irlanda (Parlamento)  
D. Vytenis ANDRIUKAITIS - Lituania (Parlamento)  
D. Pál VASTAGH - Hungría (Parlamento)  
D. Jelko KACIN - Eslovenia (Parlamento)  
D. Filadelfio BASILE - Italia (Parlamento)  
D. Caspar EINEM - Austria (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> Danuta HÜBNER - Polonia (Gobierno)  
D. Henrik DAM KRISTENSEN - Dinamarca (Parlamento)  
D. Johannes VOGGENHUBER - Parlamento Europeo  
D.<sup>a</sup> Hildegard PUWAK - Rumania (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Cristiana MUSCARDINI - Parlamento Europeo  
D. Per DALGAARD - Dinamarca (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> Liene LIEPINA - Letonia (Parlamento)

D.<sup>a</sup> Marietta GIANNAKOU - Grecia (Parlamento)  
D. Alfonso DASTIS - España (Gobierno)  
D. Sören LEKBERG - Suecia (Parlamento)  
D. Pierre CHEVALIER - Bélgica (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Lena HJELM- WALLÉN - Suecia (Gobierno)  
D. Adrian SEVERIN - Rumania (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> Pascale ANDREANI - Francia (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Androula VASSILIOU - Chipre (Parlamento)  
D. Roger BRIESCH - Comité Económico y social  
(*Tarjetas azules: Fayot, Méndez de Vigo, Borrell, MacCormick*)

*Viernes 7 de febrero de 2003*

### **1. Continuación del debate sobre la "Europa social"**

D. Esko HELLE - Finlandia (Parlamento)  
D. Ingvar SVENSSON - Suecia (Parlamento)  
D. Robert ZILE - Letonia (Gobierno)  
D. Jan ZAHRADIL - República Checa (Parlamento)  
D. Ernani LOPES - Portugal (Gobierno)  
D. João CRAVINHO - Interlocutores sociales  
D. Giacomo FILIBECK - Convención de los Jóvenes  
(*Tarjetas azules: Speroni, Dybkjaer, Hain, Heathcoat-Amory, van Lancker, Bruton*)  
D. George KATIFORIS - Grecia (Gobierno)

### **3. La dimension régionale et locale (doc. CONV 518/03)**

D.<sup>a</sup> Linda McAVAN - Parlamento Europeo  
D. Dick ROCHE - Irlanda (Gobierno)  
D. Michel BARNIER - Comisión  
D. Jozsef SZAJER - Hungría (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> MAIJ-WEGGEN - Parlamento Europeo  
D. Alberto COSTA - Portugal (Parlamento)  
D.<sup>a</sup> Gisela STUART - Reino Unido (Parlamento)  
D. Edmund WITTBRODT - Polonia (Parlamento)  
D. Alain LAMASSOURE - Parlamento Europeo  
D.<sup>a</sup> Teija TIILIKAINEN - Finlandia (Gobierno)  
D. Iñigo MENDEZ DE VIGO - Parlamento Europeo  
D. Gerhard TUSEK - Austria (Gobierno)  
D. Antonio TAJANI - Parlamento Europeo  
D.<sup>a</sup> Pascale ANDREANI - Francia (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Cristiana MUSCARDINI - Parlamento Europeo  
D. Hans Martin BURY - Alemania (Gobierno)  
D. Luis MARINHO - Parlamento Europeo  
D. Erwin TEUFEL - Alemania (Parlamento)  
D. Matti VANHANEN - Finlandia (Parlamento)  
D. Elmar BROK - Parlamento Europeo  
D. Göran LENNMARKER - Suecia (Parlamento)  
D. Peter HAIN - Reino Unido (Gobierno)  
(*Tarjeta azul: Azevedo*)

D.<sup>a</sup> Maria BERGER - Parlamento Europeo  
D. Kimmo KILJUNEN - Finlandia (Parlamento)  
D. Andrew DUFF - Parlamento Europeo  
D. Caspar EINEM - Austria (Parlamento)  
D. Neli MacCORMICK - Parlamento Europeo  
D. Josef CHABERT - Comité de las Regiones  
D. Hubert HAENEL - Francia (Parlamento)  
D. Alfonso DASTIS - España (Gobierno)  
D. Jurgen MEYER - Alemania (Parlamento)  
D. Patrick DEWAELE - Comité de las Regiones  
D.<sup>a</sup> Marie NAGY - Bélgica (Parlamento)  
D. Sören LEKBERG - Suecia (Parlamento)  
D. Carlos CARNERO - Parlamento Europeo  
D. Reinhard BÖSCH - Austria (Parlamento)  
D. Francesco SPERONI - Italia (Gobierno)  
D.<sup>a</sup> Pervenche BERÈS - Parlamento Europeo  
Lord MACLENNAN - Reino Unido (Parlamento)  
D. Ernani LOPES - Portugal (Gobierno)  
D. Pierre CHEVALIER - Bélgica (Gobierno)  
D. Manfred DAMMEYER - Comité de las Regiones  
D.<sup>a</sup> Claude du GRANDRUT - Comité de las Regiones  
D.<sup>a</sup> Eva-Riitta SIITONEN - Comité de las Regiones  
D. Jean-Luc DEHAENE, Vicepresidente

---